

Nota editorial

Cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy, el candidato en aquellos momentos explicó que lo hacía para convocar elecciones generales cuanto antes. Pasaron apenas horas para que Sánchez desmintiera tal compromiso y mostrara el verdadero objetivo de la moción que no solo albergaba él mismo sino que unía a todos sus aliados, desde Podemos hasta los nacionalistas vascos. Ese objetivo era –y sigue siendo– el intento de hacer de su “coalición Frankenstein” una mayoría de gobierno que retrase hasta el último minuto de la legislatura someterse a la prueba de voto de los españoles. Nada hay de reprochable en que un Gobierno quiera durar; sí lo hay en que, para conseguirlo, el Partido Socialista, desde su histórica minoría de 84 escaños, sostenga un consorcio que reúne a lo más radical y rupturista en la política española.

Es sintomático que a todos les una el espanto a unas elecciones generales y que entre los socios de esta coalición se relacionen con apelaciones continuas al socorro mutuo para que el andamiaje no se venga abajo. Frente a los independentistas catalanes, a la extrema izquierda populista de Podemos, a los nacionalistas vascos, el argumento consiste en que Sánchez es lo mejor que les puede pasar, de modo que, mientras se pueda, es mejor no dar opción a los ciudadanos de pronunciarse

sobre esta confluencia, la enésima, entre la izquierda y el nacionalismo.

El Gobierno de Sánchez hace de su propia debilidad la mejor baza ante quienes le apoyan. Y eso puede asegurarle que agotará la legislatura, pero también confirma que ese Gobierno no está en condiciones de representar y defender el interés general. La actuación del presidente del Gobierno es un continuo esfuerzo para mantener la coalición de la moción de censura que le llevó al poder. Nada más ha ocurrido y nada más se puede esperar. Los más optimistas dentro de esta coalición dicen que Sánchez necesita tiempo y eso explica su insistencia en agotar la legislatura. Otros, apoyados en evidencias electorales como la de Andalucía, tal vez empiecen a pensar que cuanto más tiempo Sánchez siga quedando expuesto ante los ciudadanos, mayor es el riesgo electoral que corre el PSOE. Ciertamente, que Sánchez se consolide como el candidato preferido de los independentistas es una apuesta difícil de comprender y de rendimiento dudoso.

Es posible que Sánchez confunda el electorado con la militancia del PSOE que le votó para volver a la Secretaría General de su partido y crea que la audacia es una fórmula infalible. Lo cierto es que el presidente del Gobierno descubre una y otra vez, aunque no lo reconozca, que juega muy por encima de su ca-

tegoría. Alguien que tiene que gobernar a golpe de decreto-ley (lo que empieza a merecer una reflexión urgente desde la perspectiva del deterioro de la calidad democrática), que sigue braceando para sacar los presupuestos generales del Estado, que quiere arrinconar a la oposición de PP y Ciudadanos, es el mismo que se propone como la solución al independentismo catalán y ofrece un nuevo Estatuto para el que no tiene ni votos ni escaños. Pensar que se puede excluir, de nuevo, al PP –y ahora también a Ciudadanos–, a la hora de afrontar la cuestión catalana, revela una arrogancia que suele ir acompañada de consecuencias políticas fatales. Deberían haber aprendido de lo que

resultó del Pacto del Tinell. Que Sánchez y Torra pretendan una negociación política, mano a mano, sobre el “conflicto” es un espejismo, peligroso, pero espejismo al fin y al cabo.

Por mucho que se quiera sostener la confluencia que el 1 de junio derrotó a Rajoy, esa fórmula de Gobierno no tiene recorrido. Bien al contrario, a medida que transcurra el tiempo, la necesidad del cambio será percibida por sectores aún más amplios de la sociedad española que pedirán una respuesta eficaz a los partidos que están llamados a protagonizar una alternativa razonable. ■

